

ACTIVISMOS EN EL FOCO ROJO: LAS ACCIONES COLECTIVAS EN GUERRERO, MÉXICO

Simone da Silva Ribeiro Gomes¹

Resumo: Este trabajo versa sobre tensiones entre actores en el estado de Guerrero, México. Mi hipótesis es que esta entidad es emblemática de la violencia estatal lo que explica el contexto actual. A los hechos violentos se le suman otros componentes como los altos índices de retraso económico y social y el amplio componente indígena de su población. El propósito de este texto es analizar las posibilidades para el cambio social en un contexto donde prima la violencia. Desde el inicio de los noventa, sus regiones cuentan con la participación de actores movilizados en un escenario anteriormente exclusivo de los partidos y sindicatos. A través de las relaciones entre la Policía Comunitaria, narcotraficantes, policías y activistas, analizo las posibilidades de acción colectiva. Algunos hallazgos son que, desde la perspectiva de activistas, las formas de acción contemporáneas ocurren en su mayoría por fuera de las instituciones, valorando una articulación entre diferentes luchas sociales.

Palabras clave: México. Guerrero. Acciones Colectivas. Violencia..

1. INTRODUCCIÓN

Vivir en Guerrero sin conocer su historia es como vivir en otro país y analfabeto, porque el proceso histórico de Guerrero se ha distinguido por ser un estado que muchos escritores dicen como 'bronco', 'rebelde', o que desestabiliza el país.

(Jorge, militante de la comunicación comunitaria - Iguala).

En este trabajo son examinadas las configuraciones entre activistas y las coerciones que experimentan, en un contexto de violencias históricas en la región de la Montaña, Guerrero, México. La hipótesis principal es que el continuum de represión estatal en ese ambiente ha ocasionado la radicalización de los activistas y movimientos.

Una historia paralela de Guerrero se puede contar a través de las masacres (Aguas Blancas, en 1996, El Charco, 1998 y Ayotzinapa, en 2014) y los 332 desaparecidos desde la Guerra Sucia, en la década de 1970. En ese trabajo, la

1 Doutora em Sociologia pelo Iesp-Uerj. Professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e da graduação em Ciências Sociais da UFPel. Email: simone.gomes@ufpel.edu.br .

región de Montaña de Guerrero es analizada como un espacio singular por los efectos de la coerción y violencia proveniente de los distintos lados del espectro político, que se expresa en la represión estatal y en las guerrillas.

Las demandas insatisfechas de los luchadores sociales y sus formas más violentas de acción ocasionan una respuesta gubernamental con mayor violencia y militarización. Al mismo tiempo, este continuum también explica una relativa desmovilización de los activistas, ante la inseguridad y los altos costos que implican denunciar violaciones de derechos humanos. Esta tensión entre radicalización/desmovilización de los activistas ha sido el camino heurístico que ha guiado esta pesquisa. En ese sentido, este trabajo aborda las posibilidades y estrategias empleadas en las acciones colectivas, que incluyen negociaciones con la policía comunitaria y con narcotraficantes.

El artículo busca ampliar la comprensión sobre las posibilidades de acción de activistas y, por tanto, considero el ejemplo en Guerrero necesario para la comprensión de un continuum en lo cual las medidas represivas estatales pueden ocasionar la radicalización de los movimientos, así como el crecimiento de la violencia en determinados contextos. Esa tesis puede ser matizada a partir de elementos como la pluralización de los actores de violencia locales, tal cual las distintas asociaciones entre esos actores en campo, que permiten o estorban la acción de los activistas.

Primeramente, discutiré un breve panorama histórico de la economía, política y población en Guerrero, para pasar a una breve cartografía de los actores en campo. Con el auxilio de informaciones desde la realización de un trabajo de campo en la región de la Montaña, en Guerrero, me referiré a algunos de los actores en campo: los activistas, la policía comunitaria, los caciques, el narcotráfico y el Estado, desde la perspectiva de los sujetos en acciones colectivas. Finalizo con una discusión sobre algunos matices de los activismos en esa región.

La metodología de esa investigación fue cualitativa, seguido a una revisión bibliográfica, una etnografía a partir de un recorrido por varias ciudades en Guerrero, estableciéndome en un ejido la región de La Montaña, junto a activistas, en una radio comunitaria local. Además de la observación participante, realicé tres entrevistas semiestructuradas con activistas jóvenes (entre 20 y 29 años) de ciudades y activismos distintos en esa entidad.

El número de entrevistas indica la dificultad de acceso a determinados contextos, señaladas por Malthaner (2011) en contextos de alta conflictividad social, en los cuales hay no una gran posibilidad de confrontaciones violentas y una vulnerabilidad del investigador y sus sujetos. El autor afirma: “la investigación en zonas de elevado conflicto puede no solamente requerir más flexibilidad para ajustarse a las circunstancias mutantes y para evitar el peligro, como también para aprovechar las oportunidades cuando esas aparecen” (2011, p. 175). Las dificultades incluyen la intimidación de los sujetos en locales que

investigamos, una preocupación constante, sobre todo para que no deseen hablar con los investigadores. Así que, además de las dificultades en el acceso a ese territorio, hay una preocupación en no identificar los sujetos y colectivos.

2. HISTÓRIA MÍNIMA DE GUERRERO

Guerrero es el tercer estado en poblaciones indígenas en México, con una población mayoritariamente mixteca en una fuerte dinámica interétnica con distintos pueblos como los tlapanecos, nahuas y amuzgos. La mayoría de los habitantes es mestiza, y gran parte de los indígenas viven en la Montaña, mientras que los negros y mulatos viven en la costa y la minoría blanca vive en las principales ciudades (Illades, 2000). Son 3 millones y 388 mil habitantes (INEGI, 2010), en un estado compuesto por 81 municipios y siete regiones: Norte, Montaña, Centro, Tierra Caliente, Costa Grande, Costa Chica y Acapulco de Juárez.

Su extensión territorial es de 63.794 km², y su capital es Chilpancingo de los Bravo. El estado tiene una importancia histórica considerable en el siglo XX por diferentes eventos, pese a que haya sufrido un aislamiento geográfico de otras áreas en México, desatendido por motivaciones políticas, hasta que la ciudad de Acapulco fue conectada a la capital en 1927. La geografía de Guerrero tiene sus veredas agrestes e intercaladas y es hostil a la mecanización agrícola. La atomización demográfica y aislamiento fueran yuxtapuestos a la actividad minera y al comercio ultramarino liado al exterior (Espinosa e Meza, 2000; Illades, 2000). Su geomorfología es compleja, atravesada por cadenas montañosas (Sierra Madre del Sur e Sierras del Norte) y por el río Balsas.

Estas condiciones históricas ayudan a comprender los saldos económicos y sociales de ese aislamiento en el siglo XX, y su escasa industrialización (Bartra, 2000). A partir de la década de 1950 el desarrollo económico se concentró exclusivamente en Chilpancingo y en la región turística de Acapulco, sin incluir las regiones más indígenas, especialmente la Montaña (Instituto Mexicano de la Juventud, 2003).

Guerrero es un estado eminentemente joven: cerca de mitad de la población tiene 23 años o menos (INEGI, 2010), viviendo en uno de los territorios más pobres del país. Su contribución al Producto Interno Bruto nacional (PIB), fue de 1.43% en 2011 (Illades, 2015). Sin embargo, es una entidad rica en las aportaciones a la geopolítica nacional, evidenciando la depredación de sus recursos naturales por parte de las elites políticas locales asociadas a las transnacionales de explotación minera.

Además, ocupa uno de los primeros sitios en el país en marginación social, de sus 76 municipios, 37 se consideran de muy alta y 36 de alta marginación (Poder Ejecutivo, 2010). La pobreza de ese estado es dispar; mientras que en la

Montaña se hallan las mayores carencias de la entidad y del país, por otro lado, el estado cuenta con centros turísticos de talla internacional como Acapulco, Zihuatanejo y Taxco.

En el plano económico, Guerrero sobrevive, en gran parte, de la agricultura de subsistencia, con el ejido como unidad de producción agropecuaria, además de comunidades agrarias que componen del 60 al 80% de la superficie de la región (Perez, 2004). Las tres actividades principales son: la minería, la agricultura y las grandes plantaciones donadas a los caciques locales, esencialmente dedicadas a la producción de cacao y algodón. Uno de los efectos de esas actividades fueron la implantación de una “nueva economía” (Alcantara, 2001), y un efecto colateral de negación de las múltiples identidades indígenas de la región, contribuyendo para su exterminio y despojo de sus tierras. Actualmente, los descendientes de esa población sufren injusticias perpetradas por los caciques regionales y las empresas transnacionales, expropiadoras de ejidos a favor de sus actividades o del turismo. Además, como comenta el activista Jorge, los carteles de droga obtienen un apoyo involuntario estatal, porque se aprovechan de la producción de amapola que distribuyen fertilizantes para todos los ejidatarios, en un local en que cerca de 80% de las tierras son ejidales.

La concentración de tierras en producciones agrícolas, forestales y agropecuarias en los siglos XIX y XX, en las manos de pocos, antecede la presencia de las actuales grandes haciendas. Según Álvarez (2010) e Lecuondo (1998), Guerrero en el inicio del siglo XX ya tenía los más altos índices nacionales de centralización de tierra, con cerca de cien propiedades que superaban las diez mil hectáreas cuadradas, indicando una alta concentración de las tierras, que hasta 1920 permaneció prácticamente intacta, como la base de la economía y de la política estatal.

Lecuondo (1998) señala que la propiedad de la tierra altamente concentrada en grandes propiedades es una señal de la problemática social vigente, cuando la mayoría de los habitantes no tenían como producir y vivir, tornada un factor predominante en la inconformidad social. En ese momento, la población más humilde, sobre todo quienes se movilizaban por la tierra, ya no podían contar con la protección de la justicia o fuerzas del orden, que eran las primeras a perseguirlas con la finalidad de asustarlos y evitar que se organizaran, para no confrontar los intereses de los latifundios. Además, grandes expropiaciones ejidales acontecieron en algunos municipios del estado, auxiliando el retraso socioeconómico de la región y manteniendo las condiciones de vida desfavorables para los indígenas en la costa guerrerense. Para Álvarez (2010) la reciente escasez en la producción de la pobreza, en los aumentos de índices delictivos y en el crecimiento excesivo de los flujos migratorios, son resultados indirectos de las políticas de producción agrícola del gobierno mexicano.

Ese panorama permite mapear las reivindicaciones de las organizaciones armadas en la región desde la década de 1920, que persisten actualmente, entre las que destacan las luchas lideradas por los maestros Lucio Cabañas e Genaro Vázquez en las décadas de los sesenta y los setenta. Inés, activista Inés de San Luis Acatlán, cuenta cómo experimenta la Montaña y reflexiona sobre ese aislamiento:

Siento que existen más ventajas que desventajas en las comunidades aquí, para quienes quieren tener una buena vida, pues si te quedas, ahí está tu familia, aunque vivan en un espacio pequeño, pero con algo pa sembrar. Y si te vas a la ciudad, haces otra cosa, pero no veo futuro, sólo tal vez la idea de trabajar en una empresa, ganar plata, pero ya sabemos lo que pasa cuando alguien ya no sirve a ese mundo corporativo. Yo creo que existen más ventajas que desventajas, aun cuando resista ese pensamiento de volvernos hermanos, trabajarnos en colectivo y así tenemos fuerza, en la ciudad ya no.

Asimismo, Guerrero forma parte de la franja de oro del país, una zona con una intensa actividad de minerales valorados. Según el Sistema Integral de Administración Minera de la Secretaría de Economía en el estado, existen 705 concesiones mineras vigentes que amparan una superficie equivalente al 20.5 % del total de su territorio. Esos datos expresan la contradicción de una región rica de recursos y pobre en sus condiciones de vida, localizada en un territorio de escasez generalizada.

En ese sentido, no sorprenden los bajos índices de bienestar de la población, con uno de los más grandes índices de analfabetismo, pobreza y marginalidad de México (Estrada, s/fecha). Guerrero también posee los más altos índices nacionales de migración para el norte, tal cual migración interna. El estado es caracterizado como una zona de expulsión de sus trabajadores, según el Instituto Mexicano de la Juventud (2003), en busca de mejores condiciones de vida (Illades, 2014). La activista Inés ilustra: “Cuando tenía 16 años me fui al Estado do México, pues no había oportunidades para mi aquí”.

2.1. Historia Mínima de Guerrero: panorama de la economía, política y población

Íbamos en la carretera hacia la región de la Montaña, Guerrero, a nueve horas de distancia de la Ciudad de México, junto a un intenso movimiento policiaco, con vehículos de las fuerzas armadas, en contraflujo. En ese traslado, sólo percibimos lo que pasa cuando llegan las noticias por la red social

whatsapp de uno de los integrantes del auto: están realizándose protestas, organizadas por el movimiento magisterial, en la cual la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) participa, con informaciones distintas sobre el número de heridos y muertos, en Acapulco.

El ese mismo camino, observo algunos anuncios “espectaculares” muy próximos con una petición: “habla bien de acá, Acapulco”, la cuarta ciudad más violenta del mundo, con 903 homicidios en 2015 (SERAPAZ, 2014) anteriormente visitada por turistas de todo el mundo. Aún así, pide el empresariado local que se hable bien de Acapulco.

En un panorama breve, Guerrero es el tercer estado en poblaciones indígenas en México, con una población mayoritariamente mixteca en una fuerte dinámica interétnica con distintos pueblos como los tlapanecos, nahuas y amuzgos. En términos de su composición, la mayoría de los habitantes es mestiza, y gran parte de los indígenas viven en la Montaña, mientras que los negros y mulatos² viven en la costa y la minoría blanca vive en las principales ciudades (Illades, 2000). Son 3 millones y 388 mil habitantes (INEGI, 2010), en un estado compuesto por 81 municipios y siete regiones: Norte, Montaña, Centro, Tierra Caliente, Costa Grande, Costa Chica y Acapulco de Juárez.

Su extensión territorial es de 63.794 km², 3,2 % del territorio total mexicano. Su capital es Chilpancingo de los Bravo, conocida localmente como Chilpancingo. La fundación de Guerrero como entidad federativa fue en 1984, con una importancia histórica considerable en el siglo XX por diferentes eventos acontecidos en sus municipios, pese a que el estado haya sufrido un aislamiento geográfico de otras áreas en México.

Su geografía fue importante, incluso antes de la Revolución Mexicana, con un fuerte carácter insurgente. Así fueron conformadas las relaciones entre caciques, pueblos y caudillos que pelearon por su formación como entidad federativa, en un territorio áspero, importante en las luchas por independencia, en sus sierras, montañas y ríos (Alvarez, 2010). Esa geografía es considerada una de las responsables por ese aislamiento, pues ese territorio fue históricamente desatendido por motivaciones políticas, como la ciudad de Acapulco, conectada a la capital del país en 1927.

La geografía particular de los caminos del sur de que Guerrero es parte, tiene sus veredas agrestes e intercaladas y es naturalmente hostil a la mecanización agrícola, junto a una atomización demográfica y aislamiento yuxtapuesto a la actividad minera y al comercio ultramarino liado al exterior (Espinosa & Meza, 2000; Illades, 2000). Su geomorfología es bastante compleja, atravesada por cadenas montañosas (Sierra Madre del Sur e Sierras del Norte),

2 Una observación importante es relativa a la esclavitud africana, reducida en México, en general, pero cuyo destino prioritario fue Guerrero, en su Costa Chica, y por lo tanto, el estado es uno de los primeros en términos de presencia negra en México. Los afro mexicanos, llegaron en migraciones forzadas, sobre todo de Gambia, Senegal, Guinea, Congo, Guinea Ecuatorial, Angola y Mozambique.

con un río importante entre esas: el río Balsas.

Estas condiciones históricas ayudan a comprender los saldos económicos y sociales de ese aislamiento en el siglo XX, que incluyen una escasa industrialización. (Bartra, 2000). A partir de la década de 1950 algún desarrollo económico se concentró en el estado, sobre todo en Chilpancingo y en la consolidada, en ese entonces, región turística de Acapulco, sin incluir las otras regiones, especialmente la Montaña, por creer que esa región eminentemente indígena no aportaría nada al desarrollo del estado (Instituto Mexicano de la Juventud, 2003).

Guerrero es un estado eminentemente joven: cerca de mitad de la población tiene 23 años de edad o menos (INEGI, 2010)³, viviendo en un territorio que, económicamente, es conocido como uno de los más pobres del país. Su contribución al PIB - Producto

Interno Bruto Nacional, fue de 1.43% en 2011 (Illades, 2015). Sin embargo, es una entidad rica en las aportaciones a la geopolítica nacional, evidenciando la depredación de sus recursos naturales por parte de grupos de poder específicos, sobre todo las élites políticas locales asociadas a las transnacionales de explotación minera.

Así que Guerrero ocupa uno de los primeros sitios en el país en marginación social: de sus 76 municipios, 37 se consideran de muy alta y 36 de alta marginación. Los municipios rurales guerrerenses ocupan el 25º lugar de los 1251 municipios mexicanos con alta y muy alta marginación social, en promedio (Poder Ejecutivo, 2010). La pobreza de ese estado es dispar; mientras que en la Montaña se hallan las mayores carencias de la entidad y del país, por otro lado, el estado cuenta con centros turísticos de talla internacional como Acapulco, Zihuatanejo y Taxco.

Mientras que en México solo el 8.6% de los hogares carecen de agua entubada, en las viviendas indígenas de Guerrero esta carencia se eleva al 62% (INEGI, 2006). En mi estancia en la Montaña de Guerrero, los baños eran improvisados en la tierra. Un activista de una radio comunitaria, me presentó: “vivíamos en una casa de adobe, nos fuimos a vivir en otra casa porque ya vivíamos en una casa de tierra, por familia teníamos eso de apoyarnos, así que mi hermano terminó sus estudios y ya era maestro, nos ayudó a construir una casa de concreto, más decente” (Jorge, activista oriundo de Iguala).

En el plano económico, Guerrero sobrevive, en gran parte, de la agricultura de subsistencia, con el ejido como unidad de producción agropecuaria, además de comunidades agrarias que componen del 60 al 80% de la superficie de la región (Perez, 2004), y también según las estimativas de algunos activistas locales⁴. Las tres actividades principales son: la minería, la agricultura y las

3 Sobre la distribución territorial, en términos relativos, las entidades con mayor proporción de jóvenes son Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca y Querétaro, ver Banco Mundial (2012).

4 Cuaderno de campo.

grandes plantaciones donadas a los caciques locales, esencialmente dedicadas a la producción de cacao y algodón.

Uno de los efectos de esas actividades fueron la implantación de una “nueva economía” (Alcantara, 2001), y un efecto colateral de negación de las múltiples identidades indígenas de la región, contribuyendo para su exterminio y despojo de sus tierras. Actualmente, los descendientes de esa población sufren los efectos de esas injusticias perpetradas por los caciques regionales y las empresas transnacionales, convertidas en expropiadoras de ejidos a favor de sus actividades o del turismo. Además, como comenta el activista Jorge, los distintos carteles de droga en Guerrero obtienen un apoyo involuntario estatal⁵, por que se aprovechan de la producción de amapola que distribuyen fertilizantes para todos los ejidatarios, en un local en que cerca de 80% de las tierras permanecen en el formato de ejido.

La alta concentración de tierras en producciones agrícolas, forestales y agropecuarias en los siglos XIX y XX, en las manos de pocos hombres, herencia del porfiriato, antecede la presencia de las actuales grandes haciendas. Según Álvarez (2010) e Lecuondo (1998), Guerrero en el inicio del siglo XX ya tenía los más altos índices nacionales de centralización de tierra, con cerca de cien propiedades que superaban los diez mil hectáreas cuadradas, indicando una alta concentración de las tierras, que hasta la década de 1920, permaneció prácticamente intacta, como la base de la economía y de la política estatal.

Además, Lecuondo (1998) señala que la propiedad de la tierra altamente concentrada en grandes propiedades es una señal inconfundible de la problemática social vigente, cuando la mayoría de los habitantes no tenían como producir y vivir, tornada un factor predominante en la inconformidad social. En ese momento, la población más humilde, sobre todo quienes se movilizaban por la tierra, ya no podían contar con el auxilio o protección de la justicia o fuerzas del orden, que eran las primeras a perseguirlas con la finalidad de asustarlos y evitar que se organizaran, para no confrontar los intereses de los latifundios.

Además de esa situación, las grandes expropiaciones ejidales acontecieron en algunos municipios del estado, auxiliando el retraso socioeconómico de la región y manteniendo las condiciones de vida desfavorables para los indígenas en la costa guerrerense. Así, Álvarez (2010) indica un aumento en la pobreza, en los índices delictivos y en el crecimiento excesivo de los flujos migratorios, como los resultados indirectos de las políticas de producción agrícola del gobierno mexicano.

Ese panorama económico permite mapear algunas de las circunstancias, desventajas y reivindicaciones históricas de las organizaciones armadas en la

5 Ese apoyo estatal debe ser matizado, aún cuando consideremos la afirmativa de ese joven, pues parece bien poco probable que el lucrativo negocio de la producción de drogas no cuente con el apoyo estatal.

región desde la década de 1920, que persisten actualmente, entre las que destacan las luchas lideradas por los maestros Lucio Cabañas e Genaro Vázquez en las décadas de los sesenta y los setenta. La plática con la activista Inés (San Luis Acatlán), sobre cómo experimenta la Montaña y la cómo ha experimentado la ciudad, proporciona algunas reflexiones sobre ese relativo aislamiento:

Siento que existen más ventajas que desventajas en las comunidades aquí, para quienes quieren tener una buena vida, pues si te quedas, ahí está tu familia, aunque vivan en un espacio pequeño, pero con algo pa sembrar. Y si te vas a la ciudad, haces otra cosa, pero no veo futuro, sólo tal vez la idea de trabajar en una empresa, ganar plata, pero ya sabemos lo que pasa cuando alguien ya no sirve a ese mundo corporativo. Yo creo que existen más ventajas que desventajas, aun cuando resista ese pensamiento de volvernos hermanos, trabajarnos en colectivo y así tenemos fuerza, en la ciudad ya no. Por eso yo veo más posibilidades, me enseñaran que la ciudad no es mi espacio, mi espacio es aquí, donde puedo hacer varias cosas.

Asimismo, Guerrero es un estado central para la economía mexicana, sobre todo por formar parte de un panorama nacional, especialmente en lo que convencionalmente se ha llamado franja de oro del país, una zona con una intensa actividad de minerales valorados. Según el Sistema Integral de Administración Minera de la Secretaría de Economía en el estado, actualmente existen 705 concesiones mineras vigentes que amparan una superficie equivalente al 20,5% del total de su territorio⁶. Esos datos expresan una contradicción latente, pero empíricamente observable en una región rica de recursos y tan pobre en sus condiciones de vida, localizada en un territorio de escasez generalizada, con dos municipios de la Montaña, Metlatónoc e Cochoapa el Grande, considerados en 2010 los más pobres del país.

En ese sentido, no sorprenden los bajos índices de bienestar de la población, con una de las más grandes índices de analfabetismo, pobreza y marginalidad de México (Estrada, s/d). A pesar de las diferencias entre las siete regiones, la región de la Montaña, por ejemplo, posee tasas mínimas de urbanización, con 85% de sus municipios dedicados a la actividad agrícola.

Además, Guerrero es también presente en la cima de los índices nacionales de desempleo y migración para el norte (las más altas del país, con aproximadamente un millón de personas migrantes para los EUA y Canadá, en las últimas dos décadas), tal cual migración interna. El estado está caracterizado como una zona de expulsión, según el Instituto Mexicano de la Juventud (2003), por la expulsión de sus trabajadores en busca de mejores condiciones de vida,

6 Sistema Integral de Administración Minera da Secretaría de Economía. Disponible en: http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/em_2014.>. Consultado em nov. de 2015.

por factores como el caciquismo, demostrando la alta movilidad de sus trabajadores interna y externamente (Illades, 2014). La activista Inés ilustra ese punto: “Cuando tenía 16 años me fui al Estado de México, pues no habían oportunidades para mí aquí, me quedé hasta 2000, como por cinco años [...] allá trabajé con varias cosas, en cocinas económicas, como empleada en una casa”.

3. LOS PRINCIPALES ACTORES EN GUERRERO

Esa sesión presenta los principales actores en las disputas en Guerrero. En las próximas páginas, presento a los activistas, los narcotraficantes, los caciques, la policía comunitaria y el Estado como piezas de un rompecabezas para entender el contexto de las acciones colectivas como actividades de alto riesgo.

Es necesario contextualizar los eventos represivos en esa entidad federativa, en el siglo XX, como las movilizaciones de 1968, parte de una etapa dolorosa en la historia mexicana contemporánea, cuya inflexión fue la Guerra Sucia del gobierno contra los movimientos opositores y activistas, en las décadas de 1960 y 1970. Las atrocidades en ese entonces apenas empiezan a hacerse públicas, con la exposición de casos de tortura y desapariciones, al mismo tiempo en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) proyectaba una imagen de crecimiento económico, en su época de oro (Padilla, 1998). Entre los años de 1971 y 1974, las manifestaciones estudiantiles fueron brutalmente reprimidas por el gobierno, que asistía al surgimiento de nuevas guerrillas rurales, especialmente en Guerrero, con el asesinato y desaparición de muchos activistas (Favela Gavia, 2010, Estrada (s/d) e Illades, 2000).

Los activistas en ese estado son diversos y están en actividades no violentas, como la comunicación comunitaria, educación popular, pero también las consideradas violentas, como la guerrilla. Sin embargo, la resistencia es la clave que parece unir las experiencias de los activistas en Guerrero: “me gusta mucho aquí, la vida en el campo, y si no cuidamos esa parte, que es la base para la resistencia, no sobra mucho para resistir, no tiene ningún sentido” (Inés, San Luis Acatlán). Esa forma de resistir es particular, sobre todo por encontrarse vinculada a la localidad de donde viven: “mi tesis de licenciatura, al inicio, era sobre el aprovechamiento forestal de madera para ayudar a mi comunidad que es una comunidad maderera”, prosigue Inés.

La necesidad de un conocimiento aplicado a la realidad en que viven es una constante en las historias de los activistas. En la comunicación comunitaria, Jorge, nacido en Iguala, reporta su breve experiencia universitaria: “yo no buscaba una universidad que me alejara de mi comunidad, pues veía como necesario aprender y atender a las necesidades de las personas allá, así que esa universidad [UNISUR], tenía esa propuesta”. Son fenómenos que se relacionan

a una resistencia colectiva, compartida entre la experiencia universitaria y las acciones colectivas, una constante en el activismo local.

Asimismo, en Guerrero es constante una respuesta excesiva del aparato de fuerza estatal a los movimientos sociales. Eso agrega dificultades para el activismo local, y obliga a hacer matices importantes en las investigaciones. Según Nordas e Davenport (2013), la juventud está sobrerrepresentada en movimientos disidentes y por lo tanto, es más vigilada por las autoridades. La hipótesis de esos autores es que los gobiernos serán más represivos cuando existe un bono demográfico; es decir, con la concentración de un alto número de jóvenes, es más probable que las fuerzas represivas actúen con más intensidad. En ese sentido, tanto México es un país joven, cuanto Guerrero un estado eminentemente juvenil, lo que nos auxilia en esta reflexión.

Eso ocurre porque la represión estatal es vista como una relación de costo-beneficio por las autoridades políticas, de manera que sus principales beneficios son los accesos al mantenimiento del status quo y aceptación política de la población. Basado en ese interés, las autoridades reaccionan para garantizar su poder y vencer a sus desafiantes. En general, se supone que el tamaño de la amenaza define la probabilidad del Estado de aplicar medidas represivas, guiadas no solo por la estructura de la economía política, sino también por las características étnicas o raciales de los rivales. Esta especificación sugiere que los gobiernos no sólo están respondiendo de manera mecánica a la disidencia, el terrorismo y la insurgencia, sino también a la identidad de los disidentes (Nordas e Davenport, 2013).

Otra división es el uso de la violencia por parte de los activistas, incorporados a la guerrilla, al lado de una gran mayoría del activismo que no utiliza la violencia. La tensión es latente, como afirma Abel Barrera Hernández, en un estado en que se cree que las armas “son el único recurso para hacer frente a la población civil que cataloga como enemigo potencial al que hay que someter o abatir”. La discusión sobre la organización con armas es central para las acciones colectivas locales, aunque persistan tensiones, como en la radio comunitaria en la Montaña, un pedido de música con un saludo al Ejército Popular Revolucionario (EPR), causa constreñimiento a los activistas. Igualmente, me comenta Jorge, de Iguala, la forma en que los movimientos en Guerrero tienen su foco conectado a las luchas por la tierra y la autonomía, se cruza con el movimiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Sin embargo, la lucha por la comunicación como un derecho rechaza, en gran medida, a la lucha armada, emprendida por el EZLN, según Jorge:

[...] en Chiapas conocí a compañeros de otros procesos de lucha, muchos trabajando en como elaborar un proyecto educativo en Chiapas y me relacioné con ellos y sigo aprendiendo. Voy a las

comunidades zapatistas y también a Oaxaca, viendo la fuerza de la represión y veo muchas cosas, pero no es que porque estamos viendo tanta injusticia que sea correcto agarrar en armas, tampoco que es una de las opciones que se propone en Guerrero.

Otra tensión del activismo en la región es la fuerte presencia militar, desde la década de 1970, impidiendo la acción de los movimientos locales y exterminando gran parte de los movimientos guerrilleros. En 1994, la instalación de bases militares volvió con fuerza con el surgimiento del EZLN, de forma concomitante en Chiapas y Oaxaca. Para Pansters (2012), uno de los efectos del aumento de militares en un estado es el que se presenta en la vida de los activistas cuando existe un control militar de la contención, que significa, en zonas de altos índices de violencia, una dificultad adicional de la fuerza empleada para combatir el crimen organizado, la disuasión y la represión de los movimientos.

Una manera encontrada de protegerse contra la represión estatal es obtener la protección de las policías comunitarias, lo que no es raro en la Montaña, región en la cual muchos de los jóvenes han participado en el proceso de constitución y el establecimiento, voluntariamente, de esa institución. Según la activista Inés, el apoyo de las CRAC y de sus divisiones, como la CIPOG-EZ es fundamental para las iniciativas ciudadanas y su desarticulación provoca un aumento de la fragilidad de los activistas:

lo que más se puede ver ahora es la presencia militar, y, con la desarticulación de las policías comunitarias, las cosas están un poco más débiles en las comunidades, así que hay temores de la intervención militar, cada día más vemos militares en la región, y también van llegando esas personas, los narcos (Inés, San Luis Acatlán).

De forma oficial, las policías comunitarias en el estado de Guerrero surgieron en 52 comunidades en 1995, pero en 1992, ya se celebraba el “Encuentro de dos mundos”, con el recién formado Consejo Guerrerense 500 años de resistencia india, negra y popular. Estos serían los antecedentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la primera institución con infraestructura en la ciudad de Santa Cruz El Rincón, en la Montaña (Romero, 2011). Su objetivo es de asegurar la seguridad pública comunitaria e indígena adscritas por su propia decisión, con una estructura que cuenta con comisarios, autoridades agrarias y representantes de las organizaciones activas en ese período, en colaboración con las instituciones legales en ese territorio (Gutierrez, 2012). En ese contexto, otros actores influyen en las acciones de los activistas locales, como los caciques, importantes

para la comprensión de las prohibiciones y concentraciones de poder locales.

Su establecimiento en la Montaña, que, junto a la Costa Chica, suman una población indígena y campesina de cerca de 70%, se ha dado cuando las cifras de asesinatos violentos en Guerrero oscilan entre 20 y 40 homicidios por cada 100 mil habitantes. En la narrativa constitutiva oficial, la inflexión de la violencia que propició el surgimiento de las policías comunitarias ganó fuerza con el control de regiones completas en Guerrero por grupos criminosos en la década de 1990. En ese escenario, hubo un incremento vertiginoso de la criminalidad, empeorando las condiciones de vida de los habitantes.

En esa narrativa constitutiva se menciona la observación de la ineptitud y corrupción de los sistemas de seguridad estatales, justificación utilizada para la necesidad de un sistema de seguridad propio, en el cual cada comunidad elige su propio grupo de policías comunitarios. Según Gasparello (2009), son más de 700 policías, prestando servicios gratuitos a una población de más de 300 mil habitantes. Su funcionamiento, como afirma Jorge, activista nacido en Iguala: “[...] en mi región existe una policía comunitaria, pero es más de servicio forzado que tienes que dar a tu comunidad, no es una institución, es un servicio que haces y obtiene derechos”.

De esa forma, en 1995 se informó la aparición de distintos grupos de policías comunitarias en Guerrero, en su mayoría hombres – aunque Inés, de San Luis Acatlán, comente que “siempre existieron mujeres en todas las asambleas, pero no estaban visibilizadas y reconocidas” – funcionando como vigilantes de sus comunidades, con un armamento simple y un trabajo voluntario elegido en asamblea. Esa iniciativa, de mayoría indígena, es considerada localmente como un movimiento social frente a la violencia (Gutiérrez, 2012), un frente de batalla, como otras luchas.

Sin embargo, las observaciones etnográficas en la primera sede de la policía comunitaria en Santa Cruz El Rincón permiten relativizar un poco los datos del suceso de la institución. Actualmente, la policía comunitaria parece pasar por una crisis, con disputas políticas y distintas precariedades que la afectan, como, por ejemplo, en ese municipio en que el efectivo local es de dos funcionarios, trabajando en turnos agotadores. Uno de los resultados de la crisis que los afecta, es el incremento de narcotraficantes y de militares en la región.

En esa disputa local, hay que considerar un reducido grupo de hombres poderosos en la región, los caciques, cuyo comportamiento político es asociado al tráfico de influencia, la corrupción electoral, al compadrazgo y los favores entre los pares. Además, funcionan, a pesar de los ordenamientos formales, con una profusión de reglas no escritas, pero que deben ser conocidas por todos. Son controversiales las versiones sobre el génesis de la fuerte presencia de los caciques en Guerrero. Para Bartra (2000), están en el estado desde su fundación como entidad federativa, cuando los dueños de las tierras transferían su poder a otros, extendiendo su dominio económico para las esferas militar y política. De

esa forma, en un ambiente de cacicazgo, las decisiones relativas a los conflictos son conformadas por los pocos hombres que poseen el poder, dificultando que las demandas populares sean revisadas, en un contexto de autoritarismo y violencia.

Otra consecuencia de una estructura autoritaria de poder local es la centralización y el alto control político en Guerrero, con un efecto corolario eficaz en los mecanismos de representación, en lo cual la red de alianzas formadas por los caciques se benefició, con el retraso socioeconómico de la población como su base. El beneficio derivado del aumento de las redes criminales en ese estado es igualmente atribuido al caciquismo, involucrado en el incremento de los instrumentos de coerción de la población y en más recursos para negociación de votos (Illades, 2014). Sobre las diversas fusiones entre los partidos políticos y jefes locales, Francisco, de Iguala, comenta:

Los partidos políticos son muy pesados allá, y en todo Guerrero, que está fragmentado entre PRI y PRD, y las luchas son fuertes, pues las personas se casan con los partidos y piensan que esos van a resolver sus problemas [...] una vez tuvimos un problema con otros dos compas, un sociólogo y otro historiador, y un jefe local, en un acto de violencia muy feo, casi nos lincharan.

Sin embargo, los caciques no son personajes exclusivos en Guerrero, más su permanencia es emblemática del funcionamiento del aparato estatal local, por el hecho que sus decisiones pueden ser tomadas por arriba de las instituciones y la sociedad civil. Uno de los resultados de esa estructura de poder es la falta de confianza de muchos habitantes en el gobierno, de forma que “las instituciones —como la policía o la justicia— no son consideradas instrumentos del orden, mediación, protectores del bien común, más bien son percibidas como un enemigo potencial a quien se recurre sin ganas y cuando no hay otra opción” (Almeyra, 2008, p. 177). Así que el poder de los caciques necesita tanto un refuerzo de las practicas represivas, como la limitación de la organización de masas, y, en ese punto, su actuación los convierte en actores centrales en ese trabajo.

Así, en la Montaña, los caciques tienen una alta parcela de responsabilidad en la conflictividad local, donde ejercen un gran control político, evidenciando el vínculo intrínseco entre la estructura de los caciques y la violencia. Así que cuerpos de la seguridad estatal y federal están frecuentemente involucrados en la perpetuación de la inseguridad, a partir de episodios de violencia política de los grupos armados, la represión estatal y el uso frecuente de grupos paramilitares en asaltos y asesinatos, que se han vuelto comunes.

Además, los narcotraficantes en Guerrero son actores de la violencia de una

región en que las personas buscan no llamar la atención y saber dónde moverse. Según el activista Francisco, de Iguala: “lo que se dice mucho en Iguala es ‘camine tranquilo, sepa por donde anda y no te va a pasar nada, con cuidado’”. La injerencia de los carteles locales en el año 2008, marca un incremento de la competencia entre organizaciones de narcotraficantes. Los funcionarios actuando en nombre de una organización criminal son capaces de provocar respuestas agresivas de organizaciones rivales.

Guerrero es la entidad con mayor presencia de cárteles y pandillas vinculadas al narcotráfico en México. Son grandes organizaciones criminales: Los Caballeros Templarios, Los Zetas, el Cártel del Pacífico, los Beltrán Leyva y la Barbie, controlando a otras 21 de menor tamaño, bajo la complicidad de las fuerzas de seguridad estatales. De esta forma, los ciudadanos son rehenes de las organizaciones armadas que han logrado controlar vastos territorios, con su ley del fusil. Lo ocurrido en Ayotzinapa, según Abel Barrera Hernández evidencia el poder de los cárteles, pues donde debería de haber más vigilancia por las fuerzas del orden, se han registrado 40 asesinatos en el periodo que va de enero al mes abril del 2016, apenas dos años después. La situación retratada por Hernández es que los igualtecos estarían resignados “a padecer los estragos de la violencia impuesta por los sicarios. Saben que sus vidas penden del crimen organizado. De nada sirve que esté la gendarmería, el ejército y todas las corporaciones policíacas, porque son parte de la urdimbre delincencial”. Francisco, activista nacido en Iguala, comenta:

En Iguala ahora todo está bien complejo, ya empezó a disminuir la atención, pero, al mismo tiempo, ya localizamos una limpieza; después del 26 de septiembre ya fueron más de 100 ejecutados en Iguala, de todas las edades, banda joven, señoras, señores. Es arriesgado decir quien mata, si no son narcos, policías, así que ya no existen más lugares tranquilos.

Para fines de ese análisis, cabe afirmar que, contra el poder de los caciques y el uso excesivo de violencia de las fuerzas de seguridad, los distintos activismos en Guerrero ya son peligrosos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, las protestas se volvieron aún más peligrosas con el crecimiento de los carteles del narcotráfico en la región. Las dificultades son relativas, sobre todo, a la ganancia financiera de una región cuyo clima, topografía y ubicación, la consagraran como propicia para el cultivo de marihuana y amapola.

Guerrero, según estimativas (Open Society, 2015) es el estado responsable por entre el 50% y 70% de la producción total de heroína en México, un negocio que se ha vuelto aún más lucrativo con el aumento de la demanda de sus consumidores en Estados Unidos. Si en el periodo comprendido entre 1990 y 2008 el cártel Beltrán Leyva tuvo prácticamente el monopolio de la producción y tráfico de drogas en Guerrero, después de 2008, la delincuencia organizada se dividió en grupos más pequeños y abrió paso a la invasión de cárteles competidores de otros estados. El tráfico de drogas, antes enfocado en el cultivo,

la producción y el tráfico, acabó ampliando sus actividades criminales, pasando al secuestro, la extorsión, y otras actividades delictivas. Conforme la consolidación de los cárteles en Guerrero, los “ajustes de cuentas” entre traficantes se convirtieron en un pretexto adicional para la militarización del estado.

Actualmente el ambiente en Guerrero es hostil hacia los movimientos sociales por no haber apertura para el diálogo, sino por el contrario, los intereses del gobierno estatal prevalecen e intentan acabar con las organizaciones, manteniendo una embestida contra todo el que se oponga a las grandes transnacionales y a los intereses del gobierno. El ejemplo de la construcción de una hidroeléctrica, La Parota, en la década de 2000, que sería ubicada sobre el cauce del río Papagayo, a 30 kilómetros de Acapulco, y que las comunidades han rechazado durante años, ha ocasionado un ambiente de tensión social por el asesinato y encarcelamiento de activistas, entre ellos el dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, y el líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata.

El estado también influye también en buena medida en la sensación de inseguridad de sus habitantes, pues las cifras de la violencia han evidenciado que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal han fracasado en su estrategia contra el crimen organizado. La militarización, en lugar de garantizar mayor seguridad y efectividad para abatir el crimen organizado, ha desencadenado mayor violencia. Entre los años de 2005 y 2014, fueron 19.434 homicidios reportados. Además, como señala el reporte de Open Society (2015) entre los obstáculos del sistema de justicia estatal están incluidas: el uso generalizado de tortura, la falta de rendición de cuentas presente en todo el sistema; capacidades insuficientes y recursos incorrectamente asignados; un marco legal deficiente para investigar y sancionar a los perpetradores directos de atrocidades y, mucho menos, para investigar patrones de crímenes en los que pudieran estar involucradas autoridades de alto rango; la manipulación de la ambigüedad jurisdiccional; y falta de garantías de seguridad en procedimientos legales.

Todo eso contribuye para una rutinización de la violencia, que en Guerrero ganó la atención mundial en el episodio fatídico 26 de septiembre de 2014, el día en que 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron. Si la narrativa del crimen atribuye la culpa a supuestos pistoleros del grupo criminal Guerreros Unidos, en Iguala, también se discute el involucramiento de policías municipales. Además, ante la ola delincriminal desencadenada después del inicio de la Guerra a las Drogas, en 2006, los distintos hechos violentos han rompido el cerco de los centros turísticos.

4. MATICES DE LOS ACTIVISMOS EN EL FOCO ROJO

El análisis se concentra en algunos matices de cómo se establecen los activismos en una región considerada un foco rojo, por el contexto histórico de la guerrilla, pero también por la contrainsurgencia manejada por el Estado, en un clima de rutinización de la violencia. La violencia expresada por los números en Guerrero, con índices de homicidio juvenil en 2010, por ejemplo, de 42,3 por cada 100 mil habitantes, mientras la tasa nacional de homicidio juvenil es de 25.5 cada 100 mil habitantes, aclara ese punto. Los datos de las violencias deben ser considerados junto a otros, que dificultan los activismos locales, como el hecho de que los regímenes priistas son caracterizados por la intransigencia desde sus orígenes, en el nivel nacional. En la década de 1970, con el presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), eso se materializó en la persecución contra grupos disidentes, impulsando a centenas de ciudadanos a organizarse “al margen de los estrechos cauces que el sistema político mexicano permitía” (Avila Carillo, 2011, p. 72).

En ese sentido, aún en la década de 1970, si las elecciones no se presentaban como atractivas a los jóvenes, algunos centros reunían la juventud organizada frente a las desigualdades para luchar contra el autoritarismo gubernamental, como las escuelas normales, politécnicas y universidades. Algunas de esas organizaciones político-militares mantuvieron un contacto incipiente con las comandadas por Genaro Vázquez (Asociación Cívica Nacional Revolucionaria) y Lucio Cabañas (Partido de los Pobres), aunque no se puede afirmar la colaboración más estrecha entre las guerrillas urbanas y rural.

La lucha protagonizada por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, en los 70, tuvo como antecedentes inmediatos la indiferencia de los gobiernos ante las demandas campesinas, provocando una represión estatal sentida fuertemente en los años siguientes. Según Romero (2011), el empoderamiento político de las organizaciones sociales locales tuvo como respuesta estatal un encuadre de la guerra fría y de la doctrina de la seguridad nacional, persiguiendo toda lucha democrática como acto subversivo. Es importante señalar que antes de la lucha armada, los canales instituciones y representaciones del congreso fueron buscadas por la guerrilla, sobre todo la ACG, encabezada por Genaro Vázquez, pero la represión violenta y el fraude abierto contra sus propuestas populares están entre las razones atribuidas por muchos autores (Favela Gavia, 2000) para la radicalización de las luchas locales.

De forma que la historia de Guerrero es atravesada por masacres estatales, y por una “guerra represiva de baja intensidad” (Tamayo, 2014), lo que explica que las desapariciones forzadas, ejecuciones y secuestros son intensos en esa

entidad federativa. Si las fuerzas represivas del Estado desaparecieron 557 luchadores sociales en México, entre 1969 y 2001, es sintomático que el primer desaparecido político de ese período, Epifanio Avilés Rojas, haya sido detenido en 1969 en Coyuca de Catalán, Guerrero. En ese período fue mayor la intensidad de la represión en Guerrero, con 318 desaparecidos (Avila Carillo, 2011).

Actualmente, bajo el estigma de Guerrero Bronco, entre otros, los activismos locales se establecen bajo riesgo, aunque fuera de determinados límites funcionan como una concientización para lo que pasa en el estado. Según Francisco (Iguala): “ya voy diciendo que vengo de Iguala y estoy por ahí, se ve un poco como un cliché, pero Iguala está de moda, así que estoy aprovechando para ayudar en la concientización de lo que pasa allá. Sirve también para animar a los niños”.

Además de un análisis de las posibilidades existentes para las acciones colectivas, es importante tener en cuenta las dificultades locales para movilización de orden estructural, lo que incluye distintos repertorios de acción. Un repertorio común en la Montaña incluye movilizar a las personas desde charlas en sus casas: es necesario invitarlos a las reuniones de forma presencial, convencerlos que vale la pena las luchas. Eso es necesario, sobre todo, por el miedo que sienten de las distintas estructuras coercitivas, como afirma Francisco: “las personas a veces no les gusta y no quieren meterse en problemas”. Posteriormente, el activista prosigue en su exposición de por qué no se movilizan:

Lo que pasa en Iguala es que la gente tiene mucho miedo, los colectivos están muertos, la escena está muerta, miedo a todo, a tu propia sombra, a lo que puede pasar. No quiero justificar nada tampoco, pero mi gente tiene miedo, lo que estamos intentando hacer son festivales para que todos se den cuenta de que la violencia no es normal, no hay que acostumbrarse.

Entre otras causas, la posibilidad de escondieren sus activismos del poder instituido y de los cárteles también auxilia a los activistas, como el uso de las redes sociales, cuando posible, como afirma Francisco, de Iguala: “nos mantenemos informados sobre donde estamos, yo, por ejemplo, sé que mi teléfono está interceptado, yo hablo lo indispensable, ya tenemos frases para decir nuestros lugares de encuentros”. Jorge, activista de Iguala ligado a la comunicación comunitaria, refuerza la necesidad de hacer las cosas sobre la marcha, olvidando el miedo:

cuando yo empecé mi formación para zonas de conflicto, en esa formación fui aprendiendo en el camino, no es como si yo ya supiera todo, fue sobre la marcha, y así en ese trabajo uno empieza a volverse

adicto, por la adrenalina, pero también con mucho miedo. (Jorge, activista de Iguala).

5. CONSIDERACIONES FINALES

Son complejas las relaciones entre los actores en una entidad federativa mexicana en la cual múltiples actores de la violencia se cruzan, en un escenario de precariedades y de exacerbaciones violentas históricas entre grupos de poder. En ese trabajo he trabajado a partir de la hipótesis de que el continuum de represión estatal en el estado de Guerrero ha ocasionado la radicalización de los activistas, tal cual la discreción de sus actividades.

Desde la pregunta inicial de ¿Cómo se ha organizado la juventud en tales contextos?, he buscado entender la organización de los activistas bajo un contexto represivo intenso. En Guerrero, el panorama es atractivo para los jóvenes para activismos de base cultural, que a pesar de no parecer de confrontación – como las alternativas armadas, representadas por la guerrilla – son auto gestionadas y cuestionadoras.

Tanto las movilizaciones clandestinas, como la guerrilla, como los movimientos por la cultura, comunicación y educación popular actúan en Guerrero, accionando otros repertorios, de formas más cotidianas y silenciosas. Es posible inferir que la alta represión y violencia estatal y de los cárteles no ha desaparecido con los activistas. Sin embargo, las dificultades para la acción colectiva en Guerrero parecen ser más grandes, aunque no exclusivas, que en otros espacios en México.

Una de esas dificultades es el alto costo de la represión y la falta de responsabilización del gobierno estadual y federal, evidenciada por el caso en la escuela normal en Ayotzinapa, Iguala, Guerrero. Las teorías normativas creen que el costo de la represión se supone más alto en sociedades democráticas y el costo de la coerción es menor en regímenes autoritarios (Nordas, Davenport, 2013). Sin embargo, la variable referida al tamaño de la juventud local es importante para ese análisis, indicando que los gobiernos acaban por reprimir más duramente, sin responsabilidad legal, para mantener el orden.

El objetivo general de ese texto fue develar algunas iniciativas en las cuales están involucrados jóvenes activistas en el estado de Guerrero, México, a partir de una cartografía de los actores locales y las posibilidades de acción, mediadas en un contexto de intensa violencia.

REFERÊNCIAS

ALMEYRA, Guillermo, “Los vaivenes de los movimientos sociales en México”, *Observatorio Social de America Latina*, núm. 16, pp. 87-101, 2008, en <<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/osal/20110418105928/05almeyra.pdf>>, consultado el 20 de enero de 2015.

ALVAREZ, Tomás. Los recursos naturales de Guerrero a dos siglos de independencia y uno de revolución. In: Guerrero en el contexto de las revoluciones en México. México, D.F: Editorial Fontamara, 2010.

AVILA CARRILLO, Enrique. Movimientos y conflictos sociales en el México contemporáneo (1943-2011). México, Unidad Obrera y Socialista, 2011.

BANCO MUNDIAL. La violencia juvenil en México - Reporte de la situación, el marco legal y los programas gubernamentales, 2012.

BARTRA, Armando. Crónicas Del Sur: Utopías Campesinas En Guerrero. México, D.F: Ediciones Era, 2000.

DELLA PORTA, D., & KEATING, M. Approaches and methodologies in the social sciences: a pluralist perspective. Cambridge, New York, Cambridge University Press, 2008.

ESPINOSA, Gisela ; LUNA MUNOZ, Ana Carmen. "Manos Unidas" contra la muerte materna: Por una maternidad libre y saludable para las indígenas de la Costa Chica-Montaña de Guerrero. 1a. ed. UAM-X, CSH, 2013.

ESTRADA, Raúl D. Monografía Política del estado de Guerrero (1970-2008). México, D.F: , El Colegio de Mexico, s/ d.

FAVELA GAVIA, Margarita. Sistema político y protesta social: del autoritarismo a la pluralidad. In: Ilán Bizberg y Francisco Zapata, coordinadores. Movimientos sociales. 1a. ed. México, D.F. : El Colegio de México, 395 p. ; 22 cm. -- (Los grandes problemas de México ; v. 6), 2010.

GASPARELLO, Giovanna. Policía Comunitaria de Guerrero, investigación y autonomía. Política y Cultura, otoño , núm. 32, pp. 61-78, 2009.

GOMES, Simone da S.R. Apuntes sobre la militancia de los jóvenes en contextos de violencia. Los casos de Rio de Janeiro, Brasil, y de Guerrero, México. In: Alberto Hernandez Hernández; Amalia E. Campos-Delgado. (Org.). Actores, redes y desafíos - Juventudes e infancias en América Latina.

1ed.Tijuana: COLEF, 2015, v. 1, p. 125- 138.

GUTIERREZ, Gustavo A.G. Identidad étnica, autonomía y empoderamiento de los pueblos indios de la Costa Chica - Montaña de Guerrero: la Policía Comunitaria. Tesis de Licenciatura en Sociología Rural. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, 2012.

ILLADES, Carlos. Breve historia de Guerrero. México, D.F.: Colegio de México, 2000.

ILLADES, Carlos, SANTIAGO, Teresa. Estado de Guerra – De la guerra sucia a la narcoguerra. Editora Era, Mexico, DF, 2014.

ILLADES, Carlos. Conflicto, dominación y violencia – Capítulos de historia social. Editorial Gedisa/UAM, 1ª edición, 2015, 252 pp.

INEGI – Instituto Nacional de Censo de Población y Vivienda. Panorama sociodemográfico de Guerrero / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, 2011. 182 p. : il. ISBN 978-607-494-203-3, 2010.

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. Compendio informativo sobre la población juvenil indígena, rural y migrante de México, basado en distintas fuentes informativas, 2003. Disponível online em:
<http://www.imjuventud.gob.mx/Compendio%20Informativo%20pob.%20Ind%20Egna%20Migrante.pdf>. Acesso em maio/2016.

LECUONA, Renato. Historia General de Guerrero – volumen IV – Revolución y reconstrucción. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Cordoba, Mexico DF, 1998.

MALTHANER, Stefan. Fieldwork in the context of violent conflict and authoritarian regimes. In: DELLA PORTA, Donatella e KEATING, Michael. Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2008.

NORD, Ragnhild & DAVENPORT, Christian. Fight the Youth: Youth Bulges and State Repression. American Journal of Political Science. n/a, 2013.

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS. Justicia Fallida en el Estado de Guerrero, 2015.

PADILLA, Tanalís. Rural resistance in the land of Zapata – The Jaramillista movement and the myth of the pax priista, 1940 – 1962. Durham: Duke University Press, 2008.

PANSTERS, Wil (ed). Violence, Coercion and State Making in Twentieth Century Mexico: The Other half of the Centaur. Stanford, Stanford University

Press, 2012.

PÉREZ, Irma Guadalupe Aguirre. Del Silencio a la Palabra. La experiencia de las lideresas indígenas de Xochistlahuaca, Guerrero. *Feminismo/s*, 3, junio 2004, pp. 101- 116.

ROMERO, Agustín Avila. De la lucha cívica al movimiento revolucionario. In: AVILA CARRILLO, E. *Movimientos y conflictos sociales en el México contemporáneo (1943-2011)*. México, Unidad Obrera y Socialista, 2011.

SERAPAZ - Servicios y Asesoría para la Paz A.C. Guerrero: Atrapados en el círculo de la violencia, 2014.

TAMAYO, Sergio. La violencia de Estado, los movimientos sociales, y Ayotzinapa. Presentado en el Foro de análisis: Ayotzinapa, reflexiones desde la UAM-A Plaza Roja, UAM-A, jueves 6 de noviembre, 2014.

ACTIVISM IN THE RED SPOTLIGHT: COLLECTIVE ACTION IN GUERRERO, MEXICO

Abstract: This paper analyzes tensions on the distinct political and social actors in the state of Guerrero, Mexico. My hypothesis is that this state is emblematic of the State violence that explains, the current crisis. To the violent acts, other components sum to this situation, such as high rates of economic and social delay, and the high indigenous component of the population. The aim of this text is to analyze possibilities for social change in a violent context. Since the beginning of the 90s, new actors politically engaged emerged in a scenery former exclusively held by political parties and unions. Throughout the different relations of Community Policing, narco-trafficking, police and activists, I analyze the configurations of the collective action in Guerrero. Some findings are, since the perspective of young activists, the contemporary political mobilizations value autonomy and articulate distinct social struggles.

Key Words: Mexico. Guerrero. Collective Action. Violence.